

LA TERCERA (STGO-CHILE)			17.08.2003
18.99x22.38	1		Pág. 4

EL AMPLIO RESPALDO AL DOCUMENTO PRESENTADO EL MARTES FUE PRECEDIDO DE INTENSOS CONTACTOS ENTRE GOBIERNO, EJERCITO, EMPRESARIOS Y DERECHA

Las gestiones de Lagos, Cheyre, Claro y Longueira para consensuar iniciativa

► *El presidente de los empresarios colaboró para recomponer los puentes con la derecha. El jefe de la UDI se abrió al consenso tras asegurar ciertas concesiones. La ministra Bachelet "amarró" la mayor parte de los acuerdos con el jefe del Ejército. José Miguel Insulza allanó el terreno con los partidos. Al final, Lagos selló el pacto con Cheyre, controló las críticas del PS y, de puño y letra, dio los últimos toques al documento.*

ANDREA INSUNZA

Fue uno de los procesos más coordinados al interior y fuera de La Moneda. Se abordó un tema que, bajo el régimen militar y durante la transición, dividió a los mismos actores que esta vez construyeron un consenso y celebraron juntos. El gobierno, las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios jugaron un rol en una operación que concluyó la noche del martes, con el mensaje del Presidente Ricardo Lagos transmitido por cadena nacional y una ovación en favor del Mandatario en la Cena de Pan y Vino celebrada bajo el alero de la Iglesia Católica. Un proceso de meses, lleno de reuniones e iniciativas privadas, que transformó en un éxito lo que, a primera vista, parecía un "zapato chino" para La Moneda.

Tras la sorpresiva revelación televisiva del jefe de la UDI, Pablo Longueira, respecto de que su partido haría una propuesta en materia de derechos humanos, el gobierno formó a comienzos de junio una comisión de cinco expertos en la materia para redactar una iniciativa que sería revisada por el Mandatario. A la cabeza quedó el ministro del Interior, José Miguel Insulza.

Ejército, el flanco más sensible

La proposición, en todo caso, sólo tendría sentido si lograba un objetivo: llegar a un acuerdo con el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien con su gesto del "nunca más" le allanó el camino a La Moneda para proponer medidas que ayudarán a mitigar "el desfile militar" por

los tribunales y que, de hecho, provocaron resquemor entre algunos abogados de DD.HH. y las agrupaciones que reúnen a los familiares de las víctimas de las violaciones cometidas bajo el régimen militar. Los únicos que no celebraron.

La negociación con el Ejército fue, entonces, uno de los puntos más sensibles. Y quedó en manos de la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. Su vaso comunicante con la comisión asesora fue el subsecretario de Marina, Carlos Mackenney, quien participó en algunas reuniones.

Contactos Cheyre-Bachelet

Una vez iniciado el proceso, Bachelet conversó con los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas: el general Cheyre, el almirante Miguel Angel Vergara y el general de aviación Osvaldo Sarabia, para que las ramas castrenses entregaran sus propuestas. Los dos últimos mantuvieron un bajo perfil, mientras que Cheyre jugó un rol mucho más activo: estuvo en permanente contacto con la ministra y, según quienes conocen el proceso, se reunieron cerca de una decena de veces para tratar el asunto. La misión de la secretaria de Estado: transmitirles a La Moneda y al Presidente los requerimientos de los militares y "amarrar" la mayor cantidad de acuerdos antes de que Lagos interviniera directamen-

Los primeros planteamientos del Ejército fueron con el "tejo pasado". Cheyre quería que Lagos se pronunciara explícitamente sobre la ficción de la figura de secuestro permanente.

LA TERCERA (STGO-CHILE)				17.08.2003
13.4x21.67	2	Pág. 4		2826095-2

te. Así, Bachelet mantuvo permanente contacto con Insulza y Lagos. De hecho, se reunió al menos tres veces con este último.

Claro y los empresarios

Con la comisión trabajando y la negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas en marcha, quedaba otro punto por resolver: la recepción de la propuesta y el grado de consenso que podría alcanzar en el mundo político y el resto de los actores influyentes en el país.

Así se sumó a la operación un actor ajeno a la discusión: el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sofofa, Juan Claro. El empresario se reunió al menos una vez con el comandante en jefe del Ejército. Y, desde entonces, comenzó a colaborar activamente. Su rol hasta hoy se mantiene en absoluta reserva. En todo caso, existen algunas pistas: Claro trató el tema con representantes del Ejecutivo. La ministra

Bachelet, por un lado, le pidió ayuda para morigerar las críticas de la derecha respecto de las actuaciones del general Cheyre, quien efectuó una autocrítica sobre el rol jugado por las Fuerzas Armadas en el golpe militar de 1973, en un almuerzo en que también participaron ex timonales empresariales, como Eugenio Heiremans, Hernán Briones, Manuel Valdés y Manuel Feliú, efectuado el lunes 14 de julio en la sede de la CPC.

Acercamiento Insulza-UDI

Pero lo cierto es que el rol del líder empresarial fue más allá. Algunos apuntan a que allanó un nuevo acercamiento entre La Moneda y la oposición, especialmente la UDI, que tras reponer el tema de los derechos humanos en la agenda recibió una fuerte andanada de críticas desde La Moneda.

PERSONAJES EN LA NOTICIA

Empresarios, Ejército y derecha



► Juan Claro

El timonel de la CPC y la Sofofa colaboró en forma reservada para consensuar la propuesta. Tuvo reuniones con el general Cheyre y con el gobierno. Una de sus misiones fue aplacar el malestar en la derecha por las críticas del jefe castrense al rol jugado por los civiles de ese sector en el golpe de Estado.



► Juan Emilio Cheyre

El comandante en jefe del Ejército sostuvo una decena de reuniones con la ministra de Defensa, Michelle Bachelet. Los últimos acuerdos los selló personalmente con el Presidente Lagos, como la inmunidad penal a quienes sin estar procesados entreguen información sobre el destino de los desaparecidos.



► Pablo Longueira

Fortalecer la doctrina Cheyre fue uno de los factores considerados por el presidente de la UDI para apoyar la propuesta gubernamental. El timonel gremialista conversó con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, y logró incorporar algunos puntos de su propuesta en el documento final.

LA TERCERA (STGO-CHILE)				17.08.2003
13.13x24.04	3	Pág. 4		2826098-5

Así, quien finalmente tuvo en sus manos la tarea de llegar a un entendimiento con el gremialismo fue el ministro Insulza. Este conversó con Longueira. La idea era considerar algunos de los puntos planteados por la UDI, pero, sobre todo, hacer un reconocimiento al hecho de que un partido de derecha decidiera abordar una materia que durante décadas fue patrimonio del oficialismo.

Alternancia y Lavín

La Moneda, la UDI y los empresarios coincidieron en un objetivo: fortalecer al general Cheyre. Y éste, a su vez, se transformó en el gran posibilitador del acuerdo, pues articuló el diálogo entre todos los sectores. De esta forma, el gobierno no quedaría aislado tras abordar un tema complejo, cuyo costo podía ser altísimo. A la inversa, Cheyre no quedaría expuesto nuevamente a las críticas de los partidarios del régimen militar tras efectuar una serie de gestos que rompieron con el Ejército de Pinochet.

La derecha, en tanto, apostó por proponer una solución para un tema que desconocieron por años, para "bajar los costos a un concertacionista que ahora quiere votar por Lavín", y Claro, al mando de los empresarios, fortaleció su tesis de apuntalar al gobierno porque eso estabiliza al país "y les conviene a todos" y, a su vez, reforzó el camino de la derecha para permitir la alternancia en el poder.

Tejo pasado de Cheyre

Una vez que el gobierno inició el trabajo con los militares, éstos hicieron sus propuestas. Plantearon, de hecho, la más alta de sus expectativas: el general Cheyre manifestó que esperaba un pronunciamiento explícito del Presidente Lagos para terminar con lo que los uniformados denominan la "ficción" del secuestro calificado, un delito que ha permitido procesar a los responsables de la desaparición forzada de personas, sin permitir la aplicación de la amnistía.

En ese sentido, quienes conocen el proceso aseguran que el jefe del Ejército quería que el Presidente enviara una carta a la Corte Suprema para fijar una nueva línea, tal como el ex Presidente Patricio Aylwin lo hizo durante su mandato, al señalar que debían investigarse los crímenes antes de aplicar la amnistía. Las Fuerzas Armadas pidieron buscar fórmulas para que en el caso de los detenidos desaparecidos se decretara la "muerte presunta" de las víctimas, de modo de poder cerrar los casos, a través de la amnistía o la prescripción.

Propuestas realistas

El gobierno, a través de Bachelet, respondió rápidamente: se trataba de proposiciones irreales. Algo de lo que los propios militares estaban conscientes, pero explicaron

que debían poner todos los puntos sobre la mesa. En todo caso, se trabajaron propuestas más "realistas". Varias fueron aceptadas. Una de ellas: proponer un "horizonte temporal" para el término de las causas, agilizando los procesos, nombrando más jueces y priorizando los casos de violaciones a los derechos humanos por sobre otros. Un punto que se logró.

Informe a FF.AA.

El 4 de julio, cuando ya estaban delineadas algunas de las propuestas, como rebajar penas, buscar mecanismos para distinguir las responsabilidades de quienes dieron los órdenes y los que las obedecieron, además de las medidas de reparación para los familiares de las víctimas, la ministra Bachelet se reunió con la Junta de Comandantes en Jefe. Entonces les informó las líneas gruesas de lo que se estaba conversando.

En La Moneda, en tanto, el ministro Insulza y la propia comisión de derechos humanos del gobierno tenían la percepción

de que el Presidente Lagos no daría pasos tan arriesgados, pues se exponía a las críticas de las agrupaciones de derechos humanos y de su propio partido, el PS. Pero entonces se inició una nueva operación para neutralizar a la colectividad que hoy encabeza Gonzalo Martner (ver recuadro inferior).

Lagos, por su parte, se reunió tres veces con la comisión asesora: el 23 de junio, el 17 de julio y el 24 de julio. Y una semana después, el 31 de julio, trató el tema en privado con el general Cheyre en el Hotel Loberías del Sur de Puerto Chacabuco.

En el encuentro, que duró cerca de 1 hora y 15 minutos, el Presidente le informó al general la propuesta. Ahí se zanjó otro de los puntos que ya había sido planteado, sin resultados, en la mesa de diálogo: dar inmunidad penal a quienes, sin haber sido procesados por los tribunales, aporten información fidedigna sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.